

Ciudad de Colima, Col., a 4 de junio del 2021.

Mtra. Patricia Aguilar López.
Directora de Recursos Humanos de
Telecomunicaciones de México.
Presente.



VERSION PÚBLICA

Se elimina el nombre, domicilio y firma,
por ser datos personales que identifican
a la persona.

Con fundamento en la Fracción I del
Artículo 113 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública.

At'n. Lic. Vicente López Sandoval.

Director Jurídico de
Telecomunicaciones de México.
Presente.

At'n. Lic. Miguel Ángel Silva Chávez.

Gerente Estatal en Colima, perteneciente a
Telecomunicaciones de México.
Presente.

[REDACTED], promoviendo por mi propio derecho con el carácter de
empleada de Telecomunicaciones de México, con adscripción a la Gerencia Estatal del Estado de
Colima, desempeñando funciones administrativas en esa entidad; señalando como domicilio para oír
y recibir todo tipo de notificaciones aun las de carácter personal, el ubicado en [REDACTED]
[REDACTED]; me dirijo ante ustedes, con el debido respeto para exponer lo
siguiente:

Que conforme lo establece el artículo 24, de los LINEAMIENTOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE
ACTAS, APLICACIÓN DE SANCIONES Y RECONSIDERACION, número TCM-8010-D02-18,
emitido por el Organismo Público Descentralizado Telecomunicaciones de México, vengo a
interponer en tiempo y forma la debida RECONSIDERACION respecto a la rescisión de trabajo, que
señalo la patronal, mediante oficio número 4320-0204/2021, de fecha 03 de junio del 2021, signado
por el Lic. Miguel Ángel Silva Chávez, Gerente Estatal de Colima de Telecomunicaciones de México;
mismo que me permito anexar al presente, para los efectos legales conducentes. Señalando a esta
autoridad que el contenido total de su oficio antes mencionado, me causa **AGRAVIOS**, por lo que
me permito expresarlos de la siguiente manera

En **PRIMER TERMINO**, al referir esta autoridad en su oficio número 4320-0204/2021, de fecha 03
de junio del 2021, signado por el Lic. Miguel Ángel Silva Chávez, Gerente Estatal de Colima de

Telecomunicaciones de México; capítulo de ANTECEDENTES, NUMERAL I, en donde refiere textualmente lo siguiente, "... Telecomunicaciones de México, es un Organismo Público descentralizado y sus trabajadores se encuentran comprendidos en una dualidad de ordenamientos, por una parte bajo el Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos...". Al respecto esta autoridad violenta los derechos consagrados en mi carácter de trabajadora, debido a que, si bien cierto el artículo 123 apartado A, contempla entre otras cosas, los siguiente: "... Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley., El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo...", Situación que plenamente esta autoridad confunde la relación contractual señalada en el compendio del artículo 123 A; con lo establecido a los trabajadores de este organismo, y en particular al hoy suscrito, ya que, si bien es cierto y sustentado jurídicamente, por la patronal Organismo Público Descentralizado Telecomunicaciones de México, la prestación de trabajo subordinado, que ostento, es mediante un nombramiento, y no como esta autoridad lo pretende invocar, en su oficio número 4320-0204/2021, de fecha 03 de junio del 2021, signado por el Lic. Miguel Ángel Silva Chávez, Gerente Estatal de Colima de Telecomunicaciones de México; mismo que hoy combato; haciendo alusión a lo establecido en el artículo 123 apartado B, asociado a lo establecido en el artículo 3 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, por lo tanto, mi relación laboral está más que establecida y fundada, tal y como consta en las áreas correspondientes de la patronal Organismo Público Descentralizado Telecomunicaciones de México, aunado a que esta autoridad sabe y le consta que la relación laboral está basada, contemplada y fundada en CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, y no en un CONTRATO COLECTIVO, diferencia que esta autoridad, no la ha entendido plenamente y maneja a su entero antojo, las relaciones laborales de los trabajadores en esta dependencia, situación que de manera arbitraria me RESCINDIO de mi fuente laboral sin base legal alguna. Permitiéndome apoyar en los siguientes criterios.

Época: Décima Época. Registro: 2020571. Instancia: Plenos de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo II. Materia(s): Laboral. Tesis: PC.I.L. J/51 L (10a.). Página: 1682

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. CORRESPONDE AL PATRÓN JUSTIFICAR LA TEMPORALIDAD DEL NOMBRAMIENTO Y SU CAUSA MOTIVADORA.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la relación de trabajo regulada por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado es un lazo sui generis de carácter laboral, distinto del vínculo ordinario de trabajo, por la posición de los sujetos en dicho nexo, en vista de la naturaleza imperativa del Estado y la clase del acto jurídico que genera la relación, de manera que en el trabajo burocrático la relación tiene su origen en un nombramiento y el desempeño de la función no está sujeto a la libre voluntad del titular de la

dependencia burocrática y del servidor, sino predeterminado por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, lo cual resulta una garantía para los trabajadores al servicio del Estado, de los términos y condiciones en que deben desarrollar sus labores, con entera independencia de la mera voluntad y el arbitrio de los titulares de las dependencias estatales. Al respecto, la ley referida en la fracción III del artículo 15, ha establecido que los nombramientos deberán contener el carácter de los mismos, esto es: definitivo, interino, provisional, por tiempo fijo y por obra determinada. De esta forma, se confiere al Estado discrecionalidad de otorgar nombramientos, siempre que especifique su naturaleza, siendo implícita la intención del legislador de que el patrón los encuadre en las categorías mencionadas, por lo que debe justificarse su temporalidad; de lo contrario, se permitiría el actuar arbitrario del patrón, al estar en posibilidad de otorgar nombramientos sin tener que acreditar la causa motivadora, liberándolo de la responsabilidad de la terminación de los vínculos de trabajo, con el consiguiente detrimento en los derechos de los servidores públicos. PLENO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. Contradicción de tesis 16/2018. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto, Sexto, Octavo, Décimo, Décimo Segundo, Décimo Cuarto y Décimo Quinto, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 1 de julio de 2019. Mayoría de doce votos a favor de los Magistrados Emilio González Santander, Casimiro Barrón Torres, Lourdes Minerva Cifuentes Bazán, Roberto Ruiz Martínez, Martín Ubaldo Mariscal Rojas, Noé Herrera Perea, María Soledad Rodríguez González, Felipe Eduardo Aguilar Rosete, Nelda Gabriela González García, José Antonio Abel Aguilar Sánchez, José Guerrero Láscars y Héctor Arturo Mercado López. Disidentes: María de Lourdes Juárez Sierra, Miguel Ángel Ramos Pérez, Genaro Rivera, José Sánchez Moyaho y Guadalupe Madrigal Bueno. Ponente: Nelda Gabriela González García. Secretario: José Luis Rodríguez Morales. Tesis y criterios contendientes: Tesis I.6o.T.56 L (10a.), de título y subtítulo: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO CONTRATADOS POR TIEMPO FIJO U OBRA DETERMINADA. DADAS LAS CARACTERÍSTICAS DE LA RELACIÓN LABORAL ENTRE EL ESTADO-PATRÓN Y AQUÉLLOS, ES INAPLICABLE SUPLETORIAMENTE EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.", aprobada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, Tomo 3, septiembre de 2013, página 2697; y el sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo DT.-557/2017, el sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo DT.-570/2018, el sustentado por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver amparo directo DT.-811/2016, el sustentado por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo DT.-330/2018, el sustentado por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo DT.-90/2018, el sustentado por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo DT.-1034/2016, y el diverso sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo DT.-554/2017. Nota: En términos del artículo 44, último párrafo, del Acuerdo General 52/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga disposiciones del similar 8/2015, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, esta tesis forma parte del engrose relativo a la contradicción de tesis 16/2018, resuelta por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito.

Época: Décima Época. Registro: 160599. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
 Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro III, diciembre de 2011, Tomo 5. Materia(s): Laboral. Tesis: I.13o.T.344 L (9a.). Página: 3749
CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO. SON APLICABLES A TODOS LOS TRABAJADORES DE BASE DE UNA DEPENDENCIA DEL GOBIERNO FEDERAL, AUN CUANDO NO FORMEN PARTE DEL SINDICATO MAYORITARIO.

En los artículos 67, 69, 71, 72, 73, 85, 87, 88, 90 y 91 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado se establecen las bases para la procedencia de los conflictos de naturaleza colectiva entre sindicatos burocráticos para obtener el derecho a la representación sindical, la titularidad y firma de las condiciones generales de trabajo, así como solicitar su revisión y, en su caso, impugnarlas. De dichos preceptos se advierte que existe el principio de participación en la negociación colectiva de las citadas condiciones, pues son emitidas y deben firmarse por el titular de la dependencia, así como por la representación sindical con la que se celebraron, al ser el objeto de las organizaciones sindicales el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses; consecuentemente, dada la finalidad de las condiciones generales de trabajo de regular los términos de la relación laboral, su aplicación no se construye a los trabajadores que formen parte de la agrupación sindical con la que se celebraron, por tener mayor número de trabajadores

afiliados, en el supuesto de existencia de dos o más sindicatos dentro de la misma dependencia del gobierno federal, sino que su aplicación debe extenderse a todos los trabajadores de base, por la sola circunstancia de tener el carácter de servidores públicos.

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 526/2011. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 25 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María del Rosario Mota Cienfuegos. Secretaria: Yolanda Rodríguez Posada.

Siguiendo en el orden de ideas, también es menester enfatizar el agravio que me causa lo citado por esa autoridad en su oficio número 4320-0204/2021, de fecha 03 de junio del 2021, signado por el Lic. Miguel Ángel Silva Chávez, Gerente Estatal de Colima de Telecomunicaciones de México; mismo que hoy combato; en los párrafos siguientes; **"...y a su vez, se encuentran obligados a cumplir y acatar los ordenamientos como servidores públicos, al estar comprendidos dentro del artículo 108 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionado a los artículos 4, 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas..."**. Situación que no he contravenido a los ordenamientos legales que refiere esta autoridad, en su oficio en cuestión, ya que mi actuar siempre ha sido en apego a los ordenamientos establecidos en mi fuente laboral, por la patronal Organismo Público descentralizado Telecomunicaciones de México, mismo que en todo momento los he acatado en todos y cada uno de sus puntos, como empleada, por lo tanto, considero que esta autoridad violenta mis garantías individuales, consagrados en el **artículo 1º de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos**, mismo que a la letra dice:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Párrafo reformado DOF 10-06-2011 Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Párrafo adicionado DOF 10-06-2011 Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Párrafo adicionado DOF 10-06-2011 Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Párrafo reformado DOF 04-12-2006, 10-06-2011 Artículo reformado DOF 14-08-2001

Razón por la cual, no es procedente que esta autoridad invoque articulado, cuando en ningún momento he cometido acto u omisiones que dice la autoridad, señalando claramente que no ha existido ningún acto que esta autoridad me imputo injustamente en su oficio en cuestión, mismo que hoy combato; de igual manera me permito apoyar en el siguiente criterio.

Época: Décima Época. Registro: 2021096. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 72, noviembre de 2019, Tomo III. Materia(s): Constitucional, Común. Tesis: XIX.1o. J/5 (10a.). Página: 1998

DEBIDO PROCESO INTERNACIONAL. DEBE ACUDIRSE A ÉSTE, SI EN EL ÁMBITO NACIONAL NO SE HA DESARROLLADO AMPLIAMENTE LO NECESARIO PARA EL ANÁLISIS DE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el Caso Miembros de la Aldea Chichupac y Comunidades vecinas del Municipio de Rabinal Vs. Guatemala, estableció que en una sociedad democrática debe conocerse la verdad sobre los hechos de graves violaciones de derechos humanos, y los Estados tienen la obligación tanto de investigar como de suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas; que la obligación de investigar no puede ser ejecutada de cualquier forma, sino que debe realizarse de acuerdo con los estándares establecidos por las normas y la jurisprudencia internacionales, sin que pueda desecharse o condicionarse por actos o disposiciones normativas internas de ninguna índole. En este orden de ideas, si un tribunal de amparo advierte hechos que involucran graves violaciones de derechos humanos, y en el derecho nacional, el tema específico aún no ha sido desarrollado ampliamente; entonces, debe buscar la solución justa del caso en el debido proceso internacional, integrado por las normas y jurisprudencia internacionales; máxime que el actual juicio de amparo ha superado la etapa tradicional de protección de garantías individuales, para dar lugar a una fase de un juicio de derechos fundamentales, que se ocupa de atender las situaciones en las que las normas generales, actos u omisiones de la autoridad, violan los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. Incidente de inejecución de sentencia 4/2018. 20 de septiembre de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Mauricio Fernández de la Mora. Secretario: Jesús Desiderio Cavazos Elizondo. Incidente de inejecución de sentencia 5/2018. 20 de septiembre de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Mauricio Fernández de la Mora. Secretario: Jesús Desiderio Cavazos Elizondo. Incidente de inejecución de sentencia 6/2018. 20 de septiembre de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Mauricio Fernández de la Mora. Secretario: Jesús Desiderio Cavazos Elizondo. Incidente de inejecución de sentencia 7/2018. 20 de septiembre de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Mauricio Fernández de la Mora. Secretario: Jesús Desiderio Cavazos Elizondo. Recurso de inconformidad previsto en las fracciones I a III del artículo 201 de la Ley de Amparo 19/2018. 28 de agosto de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Mauricio Fernández de la Mora. Secretario: Jesús Desiderio Cavazos Elizondo.

Por lo tanto, los artículos 108 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que señalo textualmente esa autoridad es su oficio número 4320-0204/2021, de fecha 03 de junio del 2021, signado por el Lic. Miguel Ángel Silva Chávez, Gerente Estatal de Colima de Telecomunicaciones de México; mismo que hoy combato; no tiene razón de ser, toda vez que en ningún momento se han contravenido, ni mucho menos he cometido actos de omisión en el desempeño de mi actuar como empleada, aunado a que esta autoridad violenta mis derechos consagrados constitucionales, cometiendo la violación a mis derechos humano, permitiéndome apoyar en el siguiente criterio.

Época: Décima Época. Registro: 2022130. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo II. Materia(s): Constitucional, Penal. Tesis: I.1o.P.169 P (10a.). Página: 978

REPARACIÓN INTEGRAL EN TRATOS INHUMANOS Y DEGRADANTES. SE ACTUALIZA AL DEMOSTRARSE LA EXISTENCIA DE DICHAS VIOLACIONES AL DERECHO DE INTEGRIDAD PERSONAL.

El numeral 77 de la Ley de Amparo, el cual debe interpretarse a la luz del artículo 1o. de la Constitución Federal—en la parte que establece que el Estado debe reparar las violaciones de derechos humanos— y los párrafos 325 a 327 de la sentencia de 28 de noviembre de 2018, del Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México, que resulta aplicable en términos de lo señalado en la jurisprudencia P./J. 21/2014 (10a.), de título y subtítulo: "JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.", establecen el deber de reparar integralmente la violación de derechos humanos; dicha obligación se trata de un principio fundamental del derecho interno e internacional e implica el restablecimiento de la situación anterior a la violación; de no ser factible, determinar: a) medidas para garantizar los derechos conculcados; y, b) reparar las consecuencias que las infracciones produjeron; asimismo, para determinar las medidas reparadoras deben considerar los hechos del caso, las violaciones

declaradas y los daños ocasionados; acorde con lo expuesto, los efectos de la concesión de amparo por demostrarse la existencia de tratos inhumanos y degradantes deben comprender las medidas de: a) restitución, b) rehabilitación, c) compensación, d) satisfacción y, e) medidas de no repetición, conforme al artículo 93 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que así lo dispone.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 272/2019. 7 de febrero de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Sarabia Ascencio. Secretario: Daniel Marcelino Niño Jiménez.

Nota: La tesis de jurisprudencia P./J. 21/2014 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 25 de abril de 2014 a las 9:32 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Tomo I, abril de 2014, página 204, con número de registro digital: 2006225.

Ahora bien y continuando con el orden de ideas en cuanto a lo señalado por esa autoridad en su oficio número 4320-0204/2021, de fecha 03 de junio del 2021, signado por el Lic. Miguel Ángel Silva Chávez, Gerente Estatal de Colima de Telecomunicaciones de México, mismo que hoy combato; no tiene razón de ser a lo señalado, en que contravine a lo establecido en los artículos 4, 7, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, toda vez que en ningún momento he cometido alguna falla y mi actuar siempre ha sido en apego a la normatividad establecida por el Organismo Público Descentralizado Telecomunicaciones de México, ahora bien esta autoridad viola en todo momento la normatividad establecida y a los principios generales de derecho, ya que si bien es cierto la **LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS**, establece claramente su función conforme lo señala en su artículo 1, mismo que a la letra dice: **ARTICULO 1.- La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, y tiene por objeto distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por lo actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación;** situación que también dicha Ley establece quien es la autoridad facultada para la aplicación de dicha ley, tal y como lo establece **en el artículo 9** de dicha Ley, y en ningún párrafo o articulado correspondiente establece la invasión de funciones que está cometiendo esta autoridad al invocar articulado fuera de su competencia, apoyándome en el siguiente criterio.

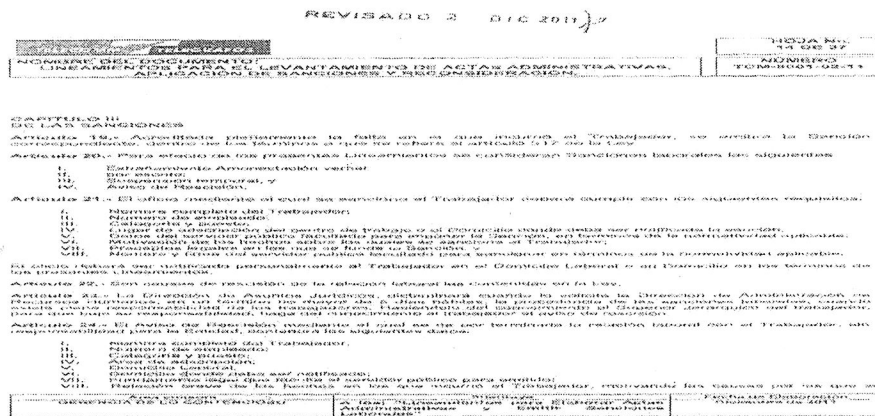
Época: Décima Época. Registro: 2022360. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Materia(s): (Administrativa).
Tesis: I.4o.A.196 A (10a.)

FACULTADES DISCRECIONALES DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS. SUS CARACTERÍSTICAS, LÍMITES Y CONTROL JUDICIAL CUANDO SE ENCUENTREN EN JUEGO DERECHOS FUNDAMENTALES.

La discrecionalidad es una facultad atribuida a los órganos administrativos por las leyes, sin predeterminar por completo el contenido u orientación que han de tener sus decisiones, por lo que el titular de las potestades o competencias queda habilitado para elegir, dentro de las diversas opciones decisorias que se le presentan, el medio más pertinente, valioso y eficiente para alcanzar el fin, con los mejores criterios de razonabilidad. Sin embargo, no debe entenderse como una potestad ilimitada o absoluta que permita realizar u omitir actos caprichosos que, a final de cuentas, se traducen en arbitrariedad, pues la actividad administrativa por ningún motivo puede quedar fuera o por encima del orden jurídico, en particular cuando la decisión requiere el entendimiento de conceptos que impliquen un conocimiento especializado; lo anterior, máxime que cuando haya deberes, ya sea expresos o categóricos, implícitos o indirectos, si se encuentran en juego derechos fundamentales, la discrecionalidad tiene límites y está sujeta a rendición de

cuentas, esto es, al control judicial, incluso en temas especializados, debiendo allegarse los tribunales de la asesoría y saberes necesarios para decidir y asegurar la mejor protección posible. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 28/2020. Karla Sofia Ontiveros Ruiz y otra. 11 de agosto de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Indira Martínez Fernández, secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada. Secretario: Ernesto González González.

En SEGUNDO TERMINO, y continuando con el orden de ideas, conforme lo estableció esta autoridad en su **numerales II, III, IV, V, VI, VII**, de su mediante oficio número 4320-0204/2021, de fecha 03 de junio del 2021, signado por el Lic. Miguel Ángel Silva Chávez, Gerente Estatal de Colima de Telecomunicaciones de México; mismo que hoy combato, la misma autoridad refiere mis antecedentes laborales ante el Organismo Público Descentralizado Telecomunicaciones de México, mimas que en su debido momento ya fueron juzgadas y resuelta en su mayoría, por las áreas correspondientes, por la cual considero que esta autoridad contraviene a lo establecido en el artículo 517 fracción I de la Ley Federal del Trabajo; y, que su actuar no está apegado a derecho, por lo tanto, mis actividades laborales las he desempeñado adecuadamente hasta el día que esta autoridad, sin fundamento alguno me ceso injustamente de mi fuente laboral, por lo que esta autoridad viola en mi perjuicio a lo emanado en la Ley Federal del Trabajo, en sus diverso articulado como lo es en los artículos 2, 3, 4, 5, 6 161, aunado a los propios ordenamientos internos de esta dependencia establecidos en los **LINEAMIENTOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS ADMINISTRATIVAS, APLICACIONES DE SANCIONES Y RECONSIDERACION**, ordenamiento establecido por la patronal, específicamente en el **CAPITULO II, DE LAS SANCIONES**, artículo 20; ya que la autoridad en ningún momento ha comprobado la imputación directa en mi contra, y solamente actuar dolosamente hacia la hoy suscrita, permitiéndome enfatizar sus lineamientos, para así comprobar la completa violación a mis derechos normados y establecidos en ordenamientos legales y por propios de esta dependencia, como sigue:



De igual manera compruebo el autoritarismo de esta autoridad, al cesarme de mi fuente de trabajo sin razón alguna, permitiéndome apoyar en los siguientes criterios:

Época: Novena Época. Registro: 163036. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Enero de 2011. Materia(s): Laboral. Tesis: 2a./J. 134/2010. Página: 1088

PRUEBAS EN EL JUICIO LABORAL. EN SU VALORACIÓN ES INAPLICABLE EL PRINCIPIO DE QUE EN CASO DE DUDA DEBE ESTARSE A LO MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR.

El artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo contiene el referido principio, el cual está íntimamente vinculado a la interpretación de las normas de trabajo, en la medida en que permite elegir la más benéfica para el trabajador cuando exista duda sobre su sentido y significado jurídicos; por su parte, el artículo 841 de la misma legislación otorga al juzgador la facultad de apreciar los hechos en conciencia y determinar libremente el valor que merecen las pruebas, con la única condición de que funde y motive su decisión. En ese sentido, se concluye que en la valoración de pruebas, los tribunales de trabajo no pueden apoyarse en el principio de que en caso de duda debe estarse a lo más favorable al trabajador, porque el propósito de éste consiste en disipar la duda en la interpretación de una norma laboral, mientras que la finalidad de las pruebas y, desde luego, de su apreciación, es determinar la veracidad de los hechos narrados en el juicio, lo que únicamente puede estar sujeto a las reglas de la lógica, del raciocinio, de la experiencia y del conocimiento.

Contradicción de tesis 194/2010. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito. 8 de septiembre de 2010. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Luis Javier Guzmán Ramos.

Época: Novena Época. Registro: 193678. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Julio de 1999. Materia(s): Laboral. Tesis: VIII.1o.33 L. Página: 833

ACTAS LEVANTADAS POR INSPECTORES DEL TRABAJO, VALOR PROBATORIO DE LAS, POR LA INASISTENCIA DEL TRABAJADOR A SU FUENTE LABORAL.

Del artículo 541, fracción I de la Ley Federal del Trabajo, se advierte con meridiana claridad que dentro de los deberes y atribuciones de los inspectores del trabajo, está la de vigilar las obligaciones de los trabajadores, para lo cual es indispensable tomar en cuenta lo dispuesto en el artículo 134, fracciones III, IV y V del mismo ordenamiento legal, con lo cual válidamente se puede concluir que los inspectores cuentan con las facultades necesarias para realizar inspecciones a las fuentes de trabajo para verificar, entre otros aspectos, el cumplimiento de las obligaciones de los trabajadores que la propia Ley Federal del Trabajo les impone. Por lo tanto, como consecuencia a la solicitud de la parte patronal el inspector del trabajo se constituye en la fuente laboral de la parte quejosa, a verificar precisamente el cumplimiento de las obligaciones del trabajador, levantando acta en la que haga constar por parte del patrón y corroborado por las manifestaciones de los testigos interrogados por el funcionario del trabajo, que la parte quejosa no se ha presentado a sus labores, dicha acta no contraviene lo dispuesto en el diverso artículo 542, fracción IV de la Ley Federal del Trabajo, que si bien señala que el acta debe levantarse con la intervención de los trabajadores y entregarles copia de la misma, no es obstáculo para considerar válida un acta el que no se haya dado intervención al trabajador, pues sí lo que se constata en dicha acta es precisamente el hecho de que el trabajador no se ha presentado a su fuente de trabajo desde determinada fecha, es evidente y lógico que no se pueda dar intervención al trabajador precisamente por la circunstancia señalada, toda vez que la interpretación del citado numeral debe entenderse en el sentido de dar intervención a las partes cuando las circunstancias lo permitan y no hacer de dicho dispositivo una regla inflexible; más aún, si a la referida acta la Junta le otorga valor probatorio pleno al no haber pruebas eficaces que demuestren lo opuesto a lo asentado en ella de conformidad con el artículo 543 de la Ley Federal del Trabajo.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.

Amparo directo 362/98. Martha Alvarado Mata. 26 de noviembre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez.

Razón por la cual, reitero a esta autoridad que no he contravenido al diverso articulado depuesto por esa autoridad en su oficio número 4320-0204/2021, de fecha 03 de junio del 2021, signado por el Lic. Miguel Ángel Silva Chávez, Gerente Estatal de Colima de Telecomunicaciones de México; mismo que hoy combato, ya que en ningún momento he contravenido a cualquier ordenamiento legal

establecido por la patronal Telecomunicaciones de México, que me imputa esta autoridad, situación que mi estado han sido en apego a la ley. Igualmente, no he contravenido en ningún momento al Manual de Procedimientos para la Operación de Sucursales Telegráficas; Políticas de Seguridad y Protección en Sucursales Telegráficas, como lo cita esta autoridad en su oficio de referencia, apoyándome en el siguiente criterio.

Época: Décima Época. Registro: 2011799. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 31, junio de 2016, Tomo IV. Materia(s): Administrativa. Tesis: I.1o.A.E.150 A (10a.). Página: 2724

ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER GENERAL. CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, SU EFICACIA ESTÁ CONDICIONADA A SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y NO A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL A SUS DESTINATARIOS.

Del artículo 9, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo se advierte que la eficacia y exigibilidad de los actos administrativos válidos se encuentran condicionadas a su legal notificación al destinatario, sin distinguir expresamente entre los de efectos generales o individuales; sin embargo, en su segundo acápito introduce una hipótesis de excepción, consistente en que la legal notificación de los actos administrativos válidos no determinará su eficacia, si dichas actuaciones se refieren a: a) el otorgamiento de "un beneficio al particular"; o, b) actos de inspección, investigación o vigilancia. Así, la nota distintiva de estos casos, que involucran el otorgamiento de un beneficio o la realización de actos de verificación, es que se dirigen a sujetos individualmente determinados, en tanto que la expresión "al particular" empleada en su redacción, denota un solo sujeto y no una generalidad, de lo cual se colige que dicho precepto se refiere a actos administrativos de efectos individuales o particularizados. Por su parte, el artículo 4 del mismo ordenamiento contiene una disposición complementaria, en el sentido de que la publicación en el Diario Oficial de la Federación será la condición para que los actos administrativos de carácter general, como los reglamentos, decretos, acuerdos, normas oficiales mexicanas, circulares y formatos, lineamientos, criterios, metodologías, instructivos, directivas, reglas, manuales, disposiciones que establecen obligaciones específicas en materia de competencia, y cualquier otro tipo de actos de naturaleza análoga, produzcan efectos jurídicos. Por tanto, la eficacia de estos últimos está condicionada a su publicación en el Diario Oficial de la Federación y no a la notificación personal a sus destinatarios.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA.

Amparo en revisión 9/2015. Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. y otra. 10 de marzo de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Mario Jiménez Jiménez.

Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 1/2020, pendiente de resolverse por el Pleno en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República.

Época: Novena Época. Registro: 166552. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, agosto de 2009. Materia(s): Administrativa. Tesis: XI.1o.A.T.45 A. Página: 1726

SERVIDORES PÚBLICOS. LA NECESIDAD DE PUBLICAR EN UN ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL LA NORMATIVA INTERNA DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, A FIN DE QUE AQUÉLLOS TENGAN CONOCIMIENTO PLENO DE SU CONTENIDO Y DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES A LAS QUE PODRÍAN ENFRENTARSE EN CASO DE INCUMPLIRLA, NO PUEDE CONSIDERARSE SATISFECHA POR LA CIRCUNSTANCIA DE QUE DICHA INFORMACIÓN SE DIFUNDA A TRAVÉS DE LA RED INSTITUCIONAL (INTRANET) CORRESPONDIENTE.

La necesidad de publicar en un órgano de difusión oficial, como el Diario Oficial de la Federación, la normativa interna de las dependencias y entidades de la administración pública federal, a fin de que sus servidores públicos tengan conocimiento pleno de su contenido y sepan -con certeza y precisión- las responsabilidades y sanciones a las que podría enfrentarse en caso de

incumplirla, no puede considerarse satisfecha por la circunstancia de que aquélla se difunda a través de la red institucional (intranet) correspondiente, pues aun cuando es válido publicar datos, resoluciones e información en esa red, lo que de suyo constituye un hecho notorio para quienes tienen acceso a ella, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, lo cierto es que mientras dicha normativa (manuales de operación, circulares, avisos, etcétera) no se publique en un medio de comunicación oficial, no es válido concluir que pueda y deba servir de sustento legal para la aplicación de las sanciones correspondientes, pues al ser disposiciones administrativas de carácter general que imponen obligaciones generales e impersonales, no pueden cobrar obligatoriedad y vigencia al no existir disposición jurídica que le reconozca obligatoriedad a esa clase de comunicaciones electrónicas. En todo caso, el incumplimiento de ese requisito, que incluso es exigido por el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se traduciría en que las mencionadas normas sean de carácter meramente informativo para sus destinatarios. No estimarlo así implicaría no brindar seguridad jurídica al servidor público a quien se dirija dicha normatividad, pues no habría certeza plena de que la conocía, junto con las responsabilidades que se le fincarían y las sanciones que se le impondrían en el supuesto de que incurriera en el incumplimiento de sus deberes o en irregularidades en el desempeño de sus funciones a propósito de su desacato, sustentado en esa clase de comunicados.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.

Revisión fiscal 19/2009. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública. 28 de mayo de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Sahuer Hernández. Secretario: Juan Gabriel Sánchez Iriarte.

De igual manera jamás he contravenido a ninguna norma legal establecida o cualquier otra acción ajena a la que no sea la que desempeño como empleada de esta dependencia, apoyándome en el siguiente criterio.

Época: Décima Época. Registro: 2001478. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2

Materia(s): Administrativa. Tesis: II.8o.(I Región) 5 A (10a.). Página: 1967

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. PARA QUE SE DETERMINE SI SE CAUSÓ UN DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO, ES NECESARIO QUE PREVIAMENTE SE DEMUESTRE EL HECHO ILÍCITO CON BASE EN EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA.

Los artículos 108, párrafo primero, 109, fracción III y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen la responsabilidad administrativa para los servidores públicos que fallen a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, y prevén la aplicación de sanciones a quienes incurran en algún acto u omisión que tenga efectos en el ámbito interno de la administración pública, sin que necesariamente afecte la esfera jurídica de los particulares, pues en este último caso, la sanción administrativa será concomitante con la responsabilidad civil o penal. Así, al determinar la responsabilidad de los servidores públicos, la actuación de la autoridad que lo haga tendrá que ser el resultado de la ponderación objetiva de los elementos relativos a la especificidad de la conducta o abstención, la gravedad de la infracción, el monto del daño causado y demás circunstancias, para acotar su actuación y así permitir la fijación de una sanción acorde con la infracción cometida. Además, para que se considere debidamente fundada una resolución en la que se imponga a un servidor público una sanción de naturaleza administrativa, deberán citarse necesariamente los artículos de las leyes secundarias que hayan desarrollado de manera específica las pautas contenidas en el mencionado artículo 113, con independencia de que se señale también como fundamento el propio precepto constitucional. Consecuentemente, para que se determine si un servidor público causó un daño patrimonial al Estado, la autoridad sancionadora debe establecer los alcances, causas y efectos de las actividades sujetas a sanción -hacer y no hacer- (nexo causal), esto es, precisar, en primer lugar, qué norma o dispositivo, en específico, regula los límites de la función o actividad pública, para de ahí definir cuál es la acción u omisión y, por ende, que tal quehacer, activo o pasivo, sea un hecho ilícito, es decir, previamente debe demostrarse el hecho ilícito con base en el incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Lo anterior es así, porque pretender reclamar el pago del daño de manera aislada, resulta jurídicamente desafortunado, en tanto que, necesariamente es consecuencia del hecho ilícito.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.
Revisión fiscal 86/2012. Director General de Responsabilidades de la Auditoría Superior de la Federación y otro. 4 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alberto Zerpa Durán. Secretario: Roberto Carlos Hernández Suárez.

EN TERCER TERMINO, y siguiendo en el orden de ideas, enfatizo que jamás he violentado, contravenido y mucho menos he realizado acto que afecten a mi fuente laboral, como lo pretende invocar esta autoridad en su oficio número 4320-0204/2021, de fecha 03 de junio del 2021, signado por el Lic. Miguel Ángel Silva Chávez, Gerente Estatal de Colima de Telecomunicaciones de México; mismo que refiere y conlleva a el CESE que estoy siendo objeto injustamente por parte de esta autoridad, ya que en su momento oportuno manifesté y comprobé lo que a mi derecho correspondía, en diligencias administrativas llevadas a cabo y que se encuentran glosados en el cuerpo del respectivo expediente que hoy combato; de igual manera combato los testimonios de los actuantes que depuso la autoridad en mi contra en el cuerpo del acta, así como el interrogatorio que realizo esa autoridad, sin fundamento legal alguno, mismo que compruebo que de manera arbitraria esta autoridad me CESO DE MI FUENTE LABORAL, aunado a que la propia autoridad violo en todo momento a su propia normatividad, establecida en los LINEAMIENTOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS ADMINISTRATIVAS, APLICACIONES DE SANCIONES Y RECONSIDERACION, emitida y vigente en este Organismo, específicamente en el CAPITULO II, DE LAS SANCIONES, artículo 20, mismo que he señalo en párrafos anteriores, aunado a todas y cada una de las violaciones de los principios generales de derecho, normatividad debidamente establecida y a mis propias garantías constitucionales, que está cometiendo esta autoridad en mi agravio y sin ser oída y vencida conforme lo establece la ley en la materia. Permitiéndome apoyar en el siguiente criterio.

Tesis: 2a./J. 126/2017 (10a.)	Gaceta del Semanario Judicial de la Federación	Décima Época
Segunda Sala	Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo I	Pag. 497

AVISO DE RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DEBE EXPRESAR LAS CAUSAS DE GRAVEDAD O DE IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR CON ESA RELACIÓN, TRATÁNDOSE DE TRABAJADORES QUE ALCANZARON UNA ANTIGÜEDAD DE MÁS DE 20 AÑOS AL SERVICIO DEL PATRÓN.

Conforme al artículo 161 de la Ley Federal del Trabajo, las relaciones laborales de más de 20 años sólo pueden rescindirse por alguna de las causas señaladas en el artículo 47 de la propia ley, siempre que ésta sea particularmente grave o que haga imposible su continuación. En este caso, el aviso de rescisión no sólo debe contener la fecha y causa o causas que la motivan, sino que ha de precisar, además, las razones por las que se considera que la falta cometida es particularmente grave o que hace imposible la continuación de la relación de trabajo, a fin de que el trabajador tenga conocimiento de ellas y pueda preparar su defensa, no sólo respecto de la existencia de la causa, sino de esas consideraciones que la califican como particularmente grave. Contradicción de tesis 165/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito y Segundo del Décimo Noveno Circuito, actual Segundo en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito. 9 de agosto de 2017. Mayoría de tres votos de los Ministros José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I. Disidentes: Alberto Pérez Dayán y Javier Laynez Potisek. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco.

Tesis y criterio contendientes:

Tesis XIX.2o.23 L, de rubro: "AVISO DE RESCISIÓN TRATÁNDOSE DE TRABAJADORES QUE ALCANZARON UNA ANTIGÜEDAD DE VEINTE AÑOS O MÁS AL SERVICIO DEL PATRÓN.", aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, agosto de 1997, página 676, y

El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo 1024/2016.

Tesis de jurisprudencia 126/2017 (10a.).-Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintitrés de agosto de dos mil diecisiete.

Época: Novena Época. Registro: 201067. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IV, Octubre de 1996

Materia(s): Penal. Tesis: VI.2o. J/69. Página: 478

TESTIGO DE OIDAS.

Por testigo de oidas debe entenderse a aquel que no conoce por sí mismo los hechos sobre los que depone, sino que es informado de ellos por una tercera persona, en cambio testigo presencial es aquel que declara respecto de hechos que percibió, habiendo sido su fuente de información directa y personal.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 293/90. Angel Eusebio Camacho o Angel Eusebio Osorio. 29 de agosto de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván.

Amparo en revisión 530/91. José Salvador Asomoza Palacios. 22 de noviembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván.

Amparo directo 122/92. Filiberto Encarnación Gutiérrez. 7 de abril de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván.

Amparo directo 456/94. Gonzalo Jiménez Pérez. 15 de marzo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: José Luis González Marañón.

Amparo en revisión 412/96. Efraín Pérez Cuapio. 4 de septiembre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.

Por lo tanto, compruebo ante esa autoridad que su oficio número 4320-0204/2021, de fecha 03 de junio del 2021, signado por el Lic. Miguel Ángel Silva Chávez, Gerente Estatal de Colima de Telecomunicaciones de México, mismo que hoy combato, es totalmente improcedente aunado que esa autoridad violenta las normas legales establecidas, a sus propios ordenamientos internos y articulado establecidos en los LINEAMIENTOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS ADMINISTRATIVAS, APLICACIONES DE SANCIONES Y RECONSIDERACION, establecido por la patronal, específicamente en el CAPITULO II, artículo 20, mismo que he citado en párrafos anteriores, para evitar múltiples repeticiones, de igual manera me permito apoyar en el siguiente criterio:

Época: Décima Época. Registro: 2015166. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo I
Materia(s): Constitucional, Laboral. Tesis: 2a. CXLVI/2017 (10a.). Página: 783

SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO. EL ARTÍCULO 47, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESA ENTIDAD NÚMERO 248, CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN IX, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

El precepto constitucional mencionado establece que en caso de separación injustificada los trabajadores tendrán derecho a optar por la reinstalación en su trabajo o por la indemnización correspondiente, previo el procedimiento legal. Ahora bien, el artículo 47, penúltimo párrafo, de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248, al prescribir que la entidad pública quedará eximida de la obligación de reinstalar al trabajador como consecuencia de un despido injustificado cuando éste cuente con menos de un año de antigüedad, contraviene el artículo 123, apartado B, fracción IX, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, al limitar la opción del trabajador de ser reinstalado, aun cuando constitucionalmente tiene libre elección de acción que habrá de ejercer ante los órganos jurisdiccionales sin que le sea restringida, pues se trata de un derecho irrenunciable, lo cual no implica acotar las facultades del legislador local conforme al artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal, en relación con la flexibilidad para que las normas locales respondan a las características y peculiaridades de los servidores públicos de cada uno de los Estados y Municipios, pero no debe perderse de vista que el legislador local no puede eliminar derechos que el propio Constituyente otorga a los trabajadores, máxime que la ley referida reconoce la aplicación del apartado B del artículo 123 constitucional, concretamente en sus artículos 7, fracción VIII, segundo párrafo y 9.

Amparo directo en revisión 3254/2016. Navyk Bahena Sandoval. 5 de abril de 2017. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I. Ausente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Teresa Sánchez Medellín.

EN CUARTO TERMINO, continuando con el orden de ideas, al contemplar esa autoridad en su oficio número 4320-0204/2021, de fecha 03 de junio del 2021, signado por el Lic. Miguel Ángel Silva Chávez, Gerente Estatal de Colima de Telecomunicaciones de México; mismo que hoy combato, su **CONSIDERANDO**, al mismo es totalmente improcedente, ya que jamás se comprobó ni se me demostró fehacientemente de que la investigación que según llevo a cabo esa autoridad, hubiera conllevado a un resultado totalmente inverosímil que me está imputando esa autoridad, ni mucho menos que la hoy suscrita hubiera cometido actos en contra de mi fuente laboral, razón por la cual estoy comprobando a esa autoridad la violación a cualquier ordenamiento legal aplicable y que el **CESE A MI FUENTE LABORAL ES TOTALMENTE IMPROCEDENTE**, apoyándome en el siguiente criterio.

SANCION DISCIPLINARIA. PARA SU APLICACION DEBE ATENDERSE A LA GRAVEDAD Y FRECUENCIA DE LA Falta, ASI COMO A LOS ANTECEDENTES DEL INFRACTOR (LEGISLACION DEL ESTADO DE QUINTANA ROO).

Es ilegal la imposición de las sanciones disciplinarias contenidas en el artículo 172 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo atendiendo únicamente a la gravedad de la infracción, dado que el invocado dispositivo, que prevé diversas penas aplicables a los funcionarios y empleados de dicho Poder que incurran en alguna falta, señala que debe atenderse a "su gravedad, frecuencia y antecedentes del infractor"; de ahí que para la aplicación de dichas sanciones deben tomarse en consideración los tres extremos señalados, pues así lo indica la conjunción copulativa "y" empleada para enlazarlos.

Amparo en revisión 405/96. Julia Mariluz Martínez Sánchez. 24 de octubre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Raquel Aldama Vega. Secretario: Gabriel A. Ayala Quiñones.

Época: Décima Época . Registro: 2002928. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito . Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2. Materia(s): Laboral
Tesis: I.9o.T.11 L (10a.). Página: 1525

TRABAJADORES DE ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS. FORMA DE CONSIDERAR SUS PRESTACIONES LABORALES CUANDO SE CONTROVIERTE SU NATURALEZA DEBIDO AL CAMBIO DE REGULACIÓN DE SU RELACIÓN LABORAL.

De la interpretación del artículo 123, apartado A, fracción XXVII, incisos g) y h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos numerales 5o., 6o. y 33 de la Ley Federal del Trabajo, se advierte el principio de nulidad de la renuncia de derechos adquiridos por los trabajadores, que debe tomarse en cuenta por las Juntas de Conciliación y Arbitraje al conocer de los conflictos laborales donde se controvierta la naturaleza de las prestaciones (legales y extralegales) de los trabajadores de organismos públicos descentralizados, derivada de la migración de este tipo de trabajadores del apartado "B" al "A" del referido artículo 123, y como consecuencia de ello, del régimen establecido de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, a la Ley Federal del Trabajo, por lo que debe establecerse que deben considerarse como legales y complementarias aquellas prestaciones establecidas en uno y otro de los citados ordenamientos, siempre y cuando su percepción no implique un doble pago, y aquellas prestaciones derivadas de reglamentos interiores de trabajo o condiciones generales de trabajo, así como las previstas administrativamente, deben considerarse analogadas a las derivadas de la contratación colectiva, con la particularidad de que las prestaciones previstas en estos últimos ordenamientos se encuentran contenidas y publicadas en diversos medios de difusión oficial.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

EN QUINTO TERMINO, y haciendo alusión a su DICTAMEN contemplado en su oficio número 4320-0204/2021, de fecha 03 de junio del 2021, firmado por el Lic. Miguel Ángel Silva Chávez, Gerente Estatal de Colima de Telecomunicaciones de México; mismo que hoy combato, compruebo a esa autoridad que al mismo no tiene razón de ser, además de que, al cesarme de mi fuente laboral, lo que está conllevando es una completa injusticia, violando cualquier precepto legal aplicable, por lo que esta autoridad, viola en mi perjuicio los artículos Constitucionales 14 y 16; así como los artículos 2, 3, 5, fracción XIII, 6, 33, 56, 132 fracción VI, 133 fracción VII, 423 fracción X, y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo; artículos 1, 2, 3, 50 fracción X, 110, 113, 114, 116, de las Condiciones Generales de Trabajo de este Organismo, por ser debidamente aplicables en mi carácter de empleada, como lo marca la ley en la materia, requiriendo de la misma se revoque en todas sus partes el oficio número 4320-0204/2021, de fecha 03 de junio del 2021, firmado por el Lic. Miguel Ángel Silva Chávez, Gerente Estatal de Colima de Telecomunicaciones de México; ya que dolosamente me están dejando en estado de indefensión de mi fuente de trabajo, así mismo apoyándome en el siguiente criterio:

Época: Décima Época. Registro: 2015166. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo I

Materia(s): Constitucional, Laboral. Tesis: 2a. CXLVI/2017 (10a.). Página: 783

SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO. EL ARTÍCULO 47, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESA ENTIDAD NÚMERO 248, CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN IX, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

El precepto constitucional mencionado establece que en caso de separación injustificada los trabajadores tendrán derecho a optar por la reinstalación en su trabajo o por la indemnización correspondiente, previo el procedimiento legal. Ahora bien, el artículo 47, penúltimo párrafo, de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248, al prescribir que la entidad pública quedará eximida de la obligación de reinstalar al trabajador como consecuencia de un despido injustificado cuando éste cuente con menos de un año de antigüedad, contraviene el artículo 123, apartado B, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al limitar la opción del trabajador de ser reinstalado, aun cuando constitucionalmente tiene libre elección de acción que habrá de ejercer ante los órganos jurisdiccionales sin que le sea restringida, pues se trata de un derecho irrenunciable, lo cual no implica acotar las facultades del legislador local conforme al artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal, en relación con la flexibilidad para que las normas locales respondan a las características y peculiaridades de los servidores públicos de cada uno de los Estados y Municipios, pero no debe perderse de vista que el legislador local no puede eliminar derechos que el propio Constituyente otorga a los trabajadores, máxime que la ley referida reconoce la aplicación del apartado B del artículo 123 constitucional, concretamente en sus artículos 7, fracción VIII, segundo párrafo y 9.

Amparo directo en revisión 3254/2016. Navyk Bahena Sandoval. 5 de abril de 2017. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I. Ausente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Teresa Sánchez Medellín.

Por lo tanto, es claro y contundente que los servidores públicos de esta dependencia, están actuando de manera dolosa hacia la hoy suscrita, debido a que los hechos por los cuales estoy siendo cesada de mi fuente laboral, en su momento fueron manifestados sin temor a equivocarme, aun cuando me involucraron en hechos que no cometí, situación que es totalmente INVESORIMIL la postura de esta autoridad, al sancionarme severamente y sin razón alguna, ya que se me juzgo sin razón alguna, aunado a que esta autoridad actúa como si fuera un tribunal, cuando no tiene tal embestidura y se me aplico una normatividad sin estar apegada a derecho, por lo tanto compruebo que existe un acoso laboral y un completo señalamiento sin fundamento alguno en contra del hoy suscrito. Permitiéndome apoyar en el siguiente criterio:

Época: Décima Época. Registro: 2006869. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 8, Julio de 2014, Tomo I. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. CCL/2014 (10a.). Página: 138

ACOSO LABORAL (MOBBING). LA PERSONA ACOSADA CUENTA CON DIVERSAS VÍAS PARA HACER EFECTIVOS SUS DERECHOS, SEGÚN LA PRETENSIÓN QUE FORMULE.

La persona que sufre daños o afectaciones derivadas del acoso laboral (mobbing) cuenta con diversas vías para ver restablecidos los derechos transgredidos a consecuencia de esa conducta denigrante. Al respecto, se parte de la base de que la verificación de ese tipo de comportamiento genera daños y afectaciones en el trabajador acosado, quien posee una serie de soluciones o alternativas legales para demandar lo que estime necesario, las cuales se traducen en diferentes acciones que la ley prevé como mecanismos para garantizar el acceso a la justicia y el recurso judicial efectivo a que se refieren los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10 de la Ley General de Víctimas, según lo que el afectado pretenda obtener. Así, por ejemplo, si pretende la rescisión del contrato por causas imputables al empleador -sustentadas en el acoso laboral (mobbing)- ese reclamo debe verificarse en la vía laboral; si, por otro lado, sufre una agresión que pueda considerarse como delito, tendrá la penal para lograr que el Estado indague sobre la responsabilidad y, en su caso, sancione a sus agresores; asimismo, podrá incoar la vía administrativa si pretende, por ejemplo, que se sancione al servidor público que incurrió en el acto ilícito, o la civil, si demanda una indemnización por los daños sufridos por esa conducta; de ahí que cada uno de esos procedimientos dará lugar a una distribución de cargas probatorias distintas, según la normativa sustantiva y procesal aplicable al caso específico, a la que el actor deberá sujetarse una vez que opte por alguna de ellas.

Amparo directo 47/2013. 7 de febrero de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho a formular voto concurrente. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz.

Por lo tanto, estoy comprobando, que en todo momento estoy siendo acoso y afectado por esta autoridad sin razón alguna y una vez que he comprobado que su oficio número 4320-0204/2021, de fecha 03 de junio del 2021, firmado por el Lic. Miguel Ángel Silva Chávez, Gerente Estatal de Colima de Telecomunicaciones de México; que hoy combato, es improcedente e infundado, requiero por esa autoridad, restituirme en mi fuente de trabajo y pagarme los salarios caídos desde el momento del cese injustificado.

Ofreciendo de mi parte las siguientes

Pruebas:

A). - LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en todo lo actuado en el presente solo y exclusivamente en lo que favorezca a la hoy promovente, esta prueba la relaciono con todos mis hechos narrados.

B). - LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANO, en todo lo que favorezca al hoy suscrito, como producto de los razonamientos lógicos jurídicos expuestos solo y exclusivamente en lo que me favorezca, esta prueba la relaciono con todos y cada uno de mis hechos narrados.

Fundo mi escrito en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 22, 28 del Estatuto Orgánico de Telecomunicaciones de México, y lo establecido en los LINEAMIENTOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS ADMINISTRATIVAS,

APLICACIONES DE SANCIONES Y RECONSIDERACION, y; demás relativos y aplicables, solicitando a esta autoridad la reconsideración al CESE que fui objeto y se efectuó la adecuada reinstalación a mi fuente de trabajo y resolución al problema que se presenta, así como el debido pago de los salarios caídos.

Por lo antes expuesto; a usted autoridad del Organismo Público Descentralizado Telecomunicaciones de México, atentamente pido se sirva:

UNICO. - Tenerme por presentado en tiempo y forma e interponiendo el debido recurso al oficio número 4320-0204/2021, de fecha 03 de junio del 2021, signado por el Lic. Miguel Ángel Silva Chávez, Gerente Estatal de Colima de Telecomunicaciones de México; señalándome en dicho oficio un DICTAMEN LABORAL, de CESE A MI FUENTE LABORAL. Violando en todo momento mis derechos como trabajadora de esta dependencia, ya que dolosamente me están dejando en estado de indefensión de mi fuente, así como señalado el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones aun las de carácter personal; tenerme por formulados los agravios expresados en el cuerpo del presente escrito y en su momento oportuno revocar en su totalidad el oficio de referencia y previos los tramites de ley dictar la debida revocación en su totalidad del oficio antes citado y se me reintegre a mi fuente de trabajo, así como al pago de manera ordinaria o extraordinaria de mi salario y de todas y cada una de las prestaciones que tengo derecho, ya que la autoridad violó en todo momento y acordar conforme a lo expuesto.

Respetuosamente.

